CATALUÑA

Barcelona: algo más que cruceros y eventos

TERESA CRESPO

Necesitamos un pacto de ciudad que priorice las políticas destinadas a combatir la creciente desigualdad social

La elección de Barcelona como capital europea del voluntariado 2014 es una muy buena noticia para las personas voluntarias, para las entidades sociales que cuentan con su colaboración desinteresada y para la sociedad en general. La distinción nos permitirá poner en valor el reconocimiento de su trabajo, pero sobre todo tendremos ocasión de reflexionar y definir más claramente su función, que no debe identificarse con la posibilidad de cubrir determinados servicios a bajo coste.

Estamos acostumbrados a que Barcelona se proyecte como ciudad turística por excelencia, escala de cruceros de lujo, sede de un sinfín de congresos y exposiciones, e incluso últimamente escenario de bodas millonarias de magnates internacionales. Si todo ello contribuye al esplendor de nuestra ciudad, bienvenido sea, siempre y cuando se conserven los valores que la han hecho tan atractiva.

Sin embargo, creo que Barcelona debería distinguirse también por ser una ciudad inclusiva en la que todas las personas se sintieran actores corresponsables de un proyecto común de ciudad, capaz de ofrecer un entorno donde vivir dignamente y en cuya construcción poder participar desde la proximidad. Hoy, en muchos de nuestros barrios no se dan estas condiciones. Las situaciones de pobreza severa que sufren familias sin ningún ingreso, con todo tipo de privaciones y déficits sociales y económicos, hacen que buena parte de la población se sienta muy lejos de congresos, cruceros y bodas suntuosas.

El Ayuntamiento debería gobernar para todos los ciudadanos con el objetivo de responder a las necesidades de cada una de las personas que viven en cualquier rincón de la ciudad. Una de las responsabilidades de los poderes públicos es actuar para construir una sociedad cohesionada y redistribuir las riquezas de manera que se evite la exclusión y el riesgo a la fractura social, lo cual significa priorizar políticas que compensen las desigualdades que nuestro modelo socioeconómico genera y acrecienta cada día en mayor medida.

El hecho de contar con unas arcas municipales económicamente saneadas debería traducirse en una mayor inversión en políticas sociales, priorizando a las personas por encima de los intereses económicos privados. Una acción de gobierno justa sería aquella que permitiera a todos los ciudadanos ejercer plenamente sus derechos y deberes, disfrutar de un acceso equitativo a unos servicios de calidad, participar democráticamente en la vida de la ciudad y ser valorados como personas con las diferencias, libertades y peculiaridades que cada uno tenga.

El *Acuerdo ciudadano para una Barcelona inclusiva*, firmado por numerosas entidades sociales y que en tiempos de bonanza significó un motor transformador de la ciudad a favor de la cohesión y contra la pobreza, debe recuperar su potencialidad e identificar ciertos ejes de actuación prioritaria, sobrepasando incluso el marco competencial que le corresponde dada la naturaleza específica de su capitalidad.

Me refiero a incrementar la vivienda social para cubrir el déficit actual, estudiar una nueva prestación que aglutine las diferentes ayudas existentes y garantice una renta de subsistencia para las personas que no disponen de los ingresos necesarios, y proteger a la familia como recurso para crear un entorno educativo y de seguridad para la infancia. Sin estos esfuerzos, la pesada losa del fracaso escolar que arrastramos desde hace años continuará lastrando nuestro desarrollo.

Por último, necesitamos un pacto de ciudad que genere actividad para las personas que no tienen trabajo. No podemos aceptar la inactividad como modelo de vida y, desgraciadamente, gran parte de nuestros jóvenes viven hoy atrapados en ella.

Quizás con motivo del año europeo del voluntariado, Barcelona podría añadir un nuevo mérito por el cual ser reconocida en Europa: el de contar con una ciudadanía activa que cree en el valor de la colaboración de todos los miembros de la comunidad y trabaja para el bien común. Esta actitud podría converitrse en un recurso formativo de desarrollo personal y preparación para el mundo laboral que favorecería, además, la emergencia de nuevas profesiones y oportunidades de convivencia y solidaridad.

Aprovechemos el año para trabajar en esa dirección y lograr que todas las personas pueden aportar y, a la vez, recibir algo del resto de la ciudadanía.

Cruceros en el puerto de Barcelona. / CARLES RIBAS

Teresa Crespo, presidenta de Entitats Catalanes d'Acció Social.

ICV, atrapado por la derecha

CARLOS JIMÉNEZ VILLAREJO

Pactando con CiU, que vota con el PP leyes regresivas, el partido heredero del PSUC abandona el catalanismo popular

Comencemos por estas palabras. Este "acuerdo", sobre la Ley de Seguridad Privada, "es fruto del diálogo, fruto de las propias negociaciones en las que han intervenido también desde el propio Ministerio del Interior hasta la Consejería del Interior de la Generalitat de Cataluña (...)". Son las palabras del diputado de CiU Jordi Jané expresando su apoyo a una de las leyes más regresivas y represivas de nuestra historia. Para CiU, el enemigo de aquí, el PP, es en el Parlamento español el gran aliado. Dos días después, ICV se alinea con CiU y demás acólitos para convocar, con más retórica que otra cosa, un referéndum sobre las relaciones de Catalunya y España.

Mientras en Madrid CiU negocia y acuerda con el PP la aprobación de una ley antidemocrática, aquí, en Catalunya, consigue el apoyo de ICV que legitima la incorporación de la izquierda a sus planes soberanistas. Naturalmente, ICV, en la medida en que apoya esa consulta, va perdiendo posición como partido de la izquierda para la defensa de los intereses populares y de clase. Pues resultará engullido por los intereses de los partidos, como la coalición gobernante en Catalunya, claramente derechistas y corruptos. El primer ejemplo lo acabamos de describir. ICV no presenta reparo alguno en pactar con una coalición que acaba de aprobar la ley que privatiza la seguridad pública hasta límites muy graves. Una ley que viola el artículo 17 de la Constitución sobre el derecho a la libertad personal y suspende la vigencia del régimen democrático de la detención de las personas contenido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Un verdadero atropello a las garantías democráticas de los ciudadanos.

Pese a todo ello, ICV pacta con quienes están de acuerdo con ese atropello. Y no parece querer enterarse del reciente informe del Tribunal de Cuentas que atribuye a CiU un "patrimonio neto negativo" superior a 10 millones de euros, es decir, un elevadísimo grado de insolvencia. Lo que quiere decir que ambas formaciones, que se proponen salvar a Catalunya de una supuesta catástrofe financiera, están sumidas en un cataclismo económico a causa de su desastrosa gestión de la que solo salen adelante gracias a su privilegiada alianza con los poderes financieros. ¿Estos son los aliados de ICV?

El problema es que hace tiempo que ICV sufre una grave desorientación. Un día de estos, Joan Herrera se refería al derecho a decidir "como elemento troncal del catalanismo". ¿De qué catalanismo? ¿O es que el catalanismo de ICV es el mismo que el de ERC y CiU? Con independencia del escaso rigor con que hablan del derecho a decidir, es inadmisible que un partido que se define de izquierda, ante la crisis colosal que sufren las personas y familias de las clases medias y bajas, anteponga, por razones tácticas, su alianza con los partidos responsables de esa crisis a la creación de una nueva identidad catalana, que debe tener su eje en las clases populares y que se fundamenta en la solidaridad con los pueblos de España que padecen la misma crisis que los trabajadores catalanes.

En su página web se define como una opción política "compromesa amb totes les persones que volen transformar el món, superar el capitalisme i que comparteixen els valors de la justícia social, la pau, la igualtat, la radicalitat democràtica, la llibertat, la laïcitat i la solidaritat i que vol construir una societat basada en la democràcia i el socialisme". El pacto identitario, que acaban de suscribir y que va a condicionar plenamente su política, nada tiene que ver con ese programa. Luego, al menos, han obrado deslealmente con sus principios.

Creo que es un buen momento para rememorar a quienes, dirigentes del PSUC, formularon otro catalanismo que ICV ha olvidado. Nos referimos al *catalanismo popular* tan bien definido por Antonio Gutiérrez Díaz en 1980, sí, hace mucho tiempo, pero mucho mas coherente con una política de izquierdas. Por otra parte, ¿no estamos releyendo a Marx? Decía así: "La Catalunya de hoy es la Catalunya de todos y no dejaremos que nos la arrebaten aquellos que con nacionalismos extremos y provocadores quieren utilizar la bandera catalana para esconder sus intereses de clase. (...) No debemos caer en la trampa de dejarla en manos de aquellos que la quieren para disimular que las tienen sucias. (...) Y frente al catalanismo instrumental de la derecha opondremos un catalanismo popular de progreso. (...) Frente a la retórica gesticulante y vacía de la derecha catalana —una derecha estrechamente ligada con la derecha española— haremos avanzar Catalunya por la vía de un catalanismo popular que evite las divisiones de nuestra colectividad, que acabe con las provocaciones interesadas del ultranacionalismo chauvinista".

Esta es la senda que ICV debe recuperar urgentemente. Para dicho fin, debe plantearse seriamente abandonar el pacto suscrito, más que discutible democráticamente y, en cualquier caso, claramente independentista.

Carlos Jiménez Villarejo es jurista y miembro de Federalistes d'Esquerres.

Printed and distributed by PressReader
PressReader.com + +1 604 278 4604
COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW